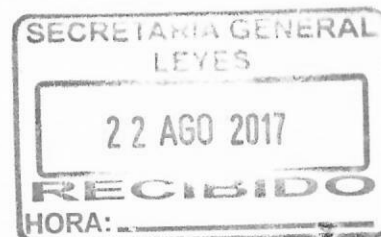


Bogotá, Agosto de 2017

Honorable Representante:

Rodrigo Lara Restrepo
Presidente de la Cámara de Representantes

Contenida



PROPOSICIÓN No.

Respetuosamente someto a consideración de la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición con la cual dejo constancia de mi informe sobre el Proyecto de Ley No. 161 de 2016 Cámara "Por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la problemática del consumo de drogas en Colombia y se dictan otras disposiciones", de acuerdo a la designación en la subcomisión nombrada por instrucción de la presidencia de la Cámara de Representantes

Más allá de una distinción semántica, "descriminalizar el consumo" es un concepto sociológico y no jurídico como sí lo es la "despenalización" de la dosis personal de sustancias psicoactivas. La iniciativa legislativa pretende básicamente modificar un concepto cultural y moral con el que la sociedad ha catalogado el comportamiento de los adictos al consumo de sustancias prohibidas. Estos cambios culturales y de opinión de la sociedad respecto de determinados comportamientos sociales no dependen de que una ley así lo indique, de hecho ya la Corte Constitucional se pronunció en derecho.

En el año 2012 fue expedida la ley 1566 donde se definió "el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas" como un asunto de salud pública y bienestar de la familia. Se establecieron procesos de atención a patologías asociadas a las adicciones a través de los Centros de Atención en Drogodependencia, CAD, siempre y cuando éstos se encuentren habilitados por la autoridad de salud y para ello deberán cumplir con unos estándares médico científicos de alta complejidad que garantice que el tratamiento de desintoxicación sea exitoso.

Establece la misma ley que la atención de las personas con consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas deberá realizarse a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS). Igualmente prevé que la Comisión de Regulación en Salud incorporará dentro de sus planes de atención, tanto del régimen subsidiado como contributivo, "todas aquellas intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y terapéuticos, medicamentos y actividades que garanticen una atención integral e integrada de las personas con trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas".

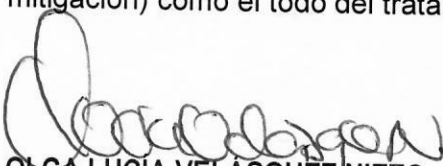
Con el fin de garantizar un adecuado manejo profesional y técnico de la problemática se establece también que El Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena– diseñará “programas de formación técnica y tecnológica profesional integral para el abordaje y atención a personas con problemas de consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”.

Igualmente, la norma citada establece que el Gobierno Nacional deberá formular “estrategias, programas, acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas” y que el adicto tiene “derecho a ser atendido de manera integral por el sistema general de seguridad social en salud”. Esto es prevención e integralidad como componentes de la política pública.

Estas alternativas de inclusión a un tratamiento médico científico dejan sin piso los propósitos del proyecto de ley 161 de 2016, luego no tiene sentido la expedición de una nueva norma cuando lo que requiere la sociedad es el cumplimiento de la normatividad existente, es decir, lo que se requiere es que el sistema de salud en su totalidad acoja el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública tal cual lo definió la OMS.

Así las cosas, toda esta dado para iniciar un abordaje de calidad y científico de esta problemática social, sin embargo, sus contenidos no se han aplicado y menos cumplido a cabalidad, aun así, ya empiezan a proponerse nuevas leyes sin atender ni conocer los resultados e impactos de la legislación anterior.

Ahora bien, respecto a la posibilidad de que el Estado suministre la sustancia psicoactiva ilegal, así sea en sitios controlados a personas adictas a ellas, es un avance en la modernidad porque nos aproxima a prácticas recreativas en el albedrío del libre desarrollo de la personalidad como lo reconoció la Corte Constitucional. Pero esta aún el obstáculo de que en Colombia el consumo de sustancias psicoactivas es ilegal y además no podemos asumir una acción de la parte (la mitigación) como el todo del tratamiento.



OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ NIETO
Representante a la Cámara Por Bogotá